

ENERO 27 Y 28 DE 1938

16.^a REUNION — SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA,

Vicepresidente de la Nación,

y del ingeniero CARLOS R. PORTO,

Vicepresidente provisorio del Senado

Ministros presentes: de Hacienda, doctor Carlos Alberto Acevedo; de Agricultura, doctor Miguel A. Cárcano; de Guerra, general Basilio B. Bertiné; y de Marina, contraalmirante Eleazar Videla.

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Bravo, Carlos A. Bruchmann, Ricardo Caballero, Rudecindo S. Campos, Raúl Ceballos Reyes, Juan Cepeda, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Jorge J. Pinto, Carlos R. Porto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, con licencia: Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Juan José Lubary, Robustiano Patrón Costas.

Senadores ausentes, con aviso: Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, Juan R. Vidal.

Senadores ausentes: Mario Arenas, Aldo Cantoni, Atanasio Eguiguren, Lucio López Peña.

SUMARIO

- 1.—Decreto del Poder Ejecutivo convocando al Congreso a sesiones extraordinarias.
- 2.—Acta.
- 3.—Homenaje a las víctimas de Itacumbú.
- 4.—Homenaje a la memoria del ex senador doctor Justiniano Posse.
- 5.—Renuncia del senador Porto, del cargo de vicepresidente provisorio del Senado. Se rechaza.
- 6.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar presidente de la Corporación Nacional de Transportes, al ingeniero don Ricardo José Gutiérrez.

- 7.—Moción del senador Arancibia Rodríguez, autorizando a la Presidencia a integrar la Comisión de Acuerdos, y para tratar los pedidos de acuerdos, solicitados por el Poder Ejecutivo, a las 20 horas. Se aprueba, integrándose la Comisión de Acuerdos.

8.—Asuntos entrados:

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar miembros de la Junta Nacional de Carnes.

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales del Ejército.

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para promociones en la Armada.

V.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a la minuta del Honorable Senado,

Enero 27 y 28 de 1938.

CAMARA DE SENADORES

16ª Reunión. Sesión extraordinaria

relativa a la situación de las empleadas de las empresas concesionarias de servicios públicos, que contraen matrimonio.

- 9.—Proyecto de ley del senador Palacios, referente al asunto de que trata el número anterior del sumario.
- 10.—Moción del senador Palacios, para que se trate sobre tablas su proyecto de ley. Se aprueba.
- 11.—Asuntos entrados:

- VI.—Mensaje dando cuenta de las medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo para resolver el conflicto suscitado por el personal de los ferrocarriles de Entre Ríos y Nord Este Argentino, con motivo de las retenciones de descuentos de sueldos y salarios realizadas por esas empresas.
- VII.—Mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando copia del decreto por el que se concede el permiso necesario para que una dotación de oficiales y marineros del buque de su majestad británica, Exeter, pueda desembarcar con armas y banderas, a fin de concurrir al acto de la inauguración del monumento a George Canning.
- VIII.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir la suma de \$ 5.614.489 m/n. en la reconstrucción de la parte de la línea del Ferrocarril Transandino Argentino, destruida por el aluvión de enero 11 de 1934.
- IX.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a reembolsar a la Empresa del Ferrocarril Central Córdoba, por el período 1º de junio - 30 de septiembre de 1937, el importe de las retenciones de los sueldos de su personal.
- X.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario de \$ 4.558.613 m/n., al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
- XI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Departamento de Obras Públicas por la suma de \$ 18.000 m/n., para atender los gastos que demande la ejecución de los bustos de los ex presidentes de la Nación, don Hipólito Irigoyen, doctor Marcelo T. de Alvear y general José F. Uriburu.
- XII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Departamento del Interior, por la suma de \$ 250.000 m/n., para contribuir a la construcción de un monumento a Simón Bolívar.

- XIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Departamento de Obras Públicas, por la suma de \$ 10.000 m/n., para atender los gastos que demande la realización de obras y adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de la Colonia de Vacaciones para empleados nacionales, que funciona en el Embalse de Río Tercero (Córdoba).
- XIV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Departamento del Interior, por la suma de \$ 1.118.440 m/n., para atender diversos gastos.
- XV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se amplía en la cantidad de \$ 200.000 m/n. los créditos destinados para el cumplimiento de la ley número 11.383, para la erección del monumento a la Independencia, en la Quebrada de Humahuaca.
- XVI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Ministerio de Agricultura por la suma de \$ 935.354 moneda nacional.
- XVII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, acordando por una sola vez a la Comisión Nacional Honoraria de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, la suma de \$ 10.000 moneda nacional.
- XVIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Ministerio de Hacienda por la suma de \$ 816.235 moneda nacional.
- XIX.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir la suma de \$ 600.000 m/n. para la adquisición de terrenos, construcción de edificios, etcétera, para una Escuela Normal de Adaptación Regional, en Neuquén.
- XX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se amplía a \$ 586.371,23 m/n. el crédito de \$ 500.000 moneda nacional solicitado por mensaje número 426 de fecha 16 de septiembre próximo pasado, para reembolsar a la Empresa del Ferrocarril Central Córdoba el importe de las retenciones de sueldos de su personal.
- XXI.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a adquirir directamente del Banco Hipotecario Nacional el total o parte de la propiedad denominada Estancia Uspallata.

- XXII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito a favor del Ministerio de Guerra por la suma de \$ 5.880.000 m/n., en carácter de refuerzo del inciso 3º, partida 12, e inciso 4º del anexo F del presupuesto general de gastos para el año 1937.
- XXIII.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 1.500.000 m/n., en la construcción en el país de un buque transporte destinado al servicio de la costa sur.
- XXIV.—Mensaje y proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo para abrir un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de \$ 370.111 moneda nacional.
- XXV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, acordando pensión a la señora Esther María Anzorena de Murtagh, viuda del ex auxiliar 3º de la Dirección General de Ganadería del Departamento de Agricultura, doctor Eduardo W. Murtagh.
- XXVI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se abre un crédito extraordinario al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por la suma de \$ 196.535 moneda nacional.
- XXVII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, destinando la suma de \$ 100.000 moneda nacional, para reintegrar a rentas generales los fondos tomados para la realización, durante el año 1937, de trabajos hidráulicos en la provincia de Santiago del Estero.
- XXVIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, referente a diversos créditos autorizados en acuerdo de ministros, que ascienden a \$ 2.004.050 moneda nacional.
- XXIX.—Mensaje del Poder Ejecutivo acusando recibo de la comunicación del Honorable Senado, sobre designación de Presidente de la Nación para el caso de acefalia, recaída en el senador doctor Robustiano Patrón Costas.
- XXX.—Mensaje del Poder Ejecutivo invitando a las señores senadores al acto de la inauguración del monumento erigido a Jorge Canning.
- XXXI.—Comunicación de la Cámara de Diputados.
- 12.—Moción del senador Arancibia Rodríguez para que el Senado se constituya en comisión a fin de considerar el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto para 1938. Se aprueba.
- 13.—Asuntos entrados:

XXXII.—Comunicaciones oficiales.

XXXIII.—Peticiones.

- 14.—Proyecto de ley del senador Palacios acordando un subsidio extraordinario a la Universidad de Buenos Aires con destino a la construcción del edificio para la Facultad de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
- 15.—Proyecto de ley de los senadores Galíndez y Figueroa, autorizando al Poder Ejecutivo a contribuir hasta con la suma de \$ 100.000 m/n., para aporte al monumento a los indios quilmes.
- 16.—Se concede licencia para faltar a sesiones a los senadores Patrón Costas, Galíndez, Figueroa y Lubary.
- 17.—Minuta de comunicación del senador Palacios sobre inclusión entre los asuntos a tratarse en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley relativo a la protección de los niños en edad escolar.
- 18.—Consideración del proyecto de ley a que se refiere el número 9 del sumario. Se aprueba.
- 19.—El Senado se constituye en comisión para estudiar el proyecto de ley en revisión, de presupuesto general de gastos y recursos para 1938.
- 20.—Consideración del asunto a que se refiere el número anterior del sumario. Se aprueba, quedando convertido en ley.

Apéndice: I.—Inserciones solicitadas por el senador Palacios.

II.—Inserción solicitada por el senador Martínez.

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de enero de 1938, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el

1

CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

El señor secretario va a dar lectura del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

Buenos Aires, enero 13 de 1938.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para llevar a su conocimiento, en copia autenticada, el decreto

Tenientes coroneles de ingenieros: Don Manuel Thorne y don Emilio A. Daul.

Teniente coronel de aviación: Don Pedro Zanni.

Las promociones que se proponen, impuestas por prescripciones de la ley de cuadros y ascensos, número 9.675, corresponden al año 1937, reuniendo los candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las que se otorgarán con la antigüedad que la misma determina.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Basilio B. Pertiné.

—A la Comisión de Acuerdos.

IV

—Se lee:

Buenos Aires, 19 de enero de 1938.

Al Honorable Senado de la Nación.

En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 86, inciso 16 de la Constitución nacional, tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo que él determina para promover al grado inmediato superior a los señores capitán de navío Osvaldo Repetto y capitán de fragata Ernesto Basílico.

Las promociones que se proponen, impuestas por prescripciones de la ley orgánica de la Armada, número 4.856, corresponden al año 1937, reuniendo los candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las que se otorgarán con la antigüedad del 31 de diciembre de 1937.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Eleazar Videla.

—A la Comisión de Acuerdos.

V

—Se lee:

Buenos Aires, diciembre 3 de 1937.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad con referencia a su comunicación de fecha 14 de septiembre último, relacionada con la cesantía de algunas empleadas ferroviarias con motivo de contraer matrimonio, significándole que, antes de la declaración formulada por ese honorable cuerpo, tales cesantías habían merecido la atención de las dependencias correspondientes.

En efecto; en el mes de mayo último se originó en el Departamento de Obras Públicas el expediente número 19.262-FF-937, en el que constan los estudios efectuados en el asunto, por la Dirección General de Ferrocarriles. Posteriormente a la comunicación de vuestra honorabilidad se produjeron los dictámenes de los señores procuradores del Tesoro y General de la Nación que se habían pedido.

Del estudio legal practicado por esos funcionarios, resulta que el Poder Ejecutivo carece de facultades para dictar medidas compulsivas en este asunto. Por esta razón y siguiendo los consejos jurídicos, se ha dictado la medida de carácter declaratorio que en copia, juntamente con la de esos dictámenes, acompaña, creyendo que con ello se pondrá un límite razonable a esa situación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Manuel R. Alvarado.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1937.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad transcribiéndole a continuación, en lo principal, como ampliación a su mensaje número 449 de fecha 3 de diciembre en curso y a simple título informativo, la nota que ha recibido de la empresa del Ferrocarril del Sud, formulando algunas consideraciones y explicaciones relacionadas con la cesantía de empleadas de la misma.

Dice así, la nota de referencia:

«La empresa no había utilizado en su administración personal femenino hasta hace poco tiempo, pero, cuando introdujo sistemas mecánicos de contabilidad, consideró que para el servicio de esas máquinas y la revisión de fichas y boletos, acaso sería conveniente dar trabajo a muchachas jóvenes, que tienen alguna preparación comercial.

«La característica especial de dicho trabajo, por lo general mecánico y de rutina, requiere más habilidad y atención que discernimiento y estudio. La tarea a desempeñar, por su naturaleza, aleja toda perspectiva de una carrera, y la modestia de las condiciones requeridas para su desempeño hace imposible abonar altos salarios.

«Atentas las condiciones del trabajo, se dió preferencia a las niñas cuya edad oscila entre la de la salida de la escuela y la del casamiento.

«La contabilidad mecánica exige una gran regularidad. Por la normalidad con que se requiere el desempeño de las tareas, las mujeres casadas estaban excluidas, pues ellas exigen la incorporación de personal adicional, lo que haría ineconómica la adopción de este sistema.

«Si por cualquier circunstancia la empresa se viese privada de emplear en esta sección exclusivamente niñas solteras, tendría que suprimir por inconveniente el equipo femenino de contabilidad mecánica, privando a los hogares de las jóvenes empleadas de la ayuda que ahora proporcionan.

«Téngase presente que, con excepción de las dactilógrafas, la empresa otorga preferencia para llenar los puestos femeninos, a las huérfanas de ex empleados en situación de necesidad. He ahí una consecuencia que debe tenerse en cuenta. Si las muchachas casadas continuasen en sus puestos, a pesar de su nuevo estado, que generalmente encierra una mejoría económica y desplaza hacia el marido la responsabilidad económica del mantenimiento del hogar, confiando a la mujer su organización in-

terna y espiritual, se cerraría la posibilidad de una ayuda para todas aquellas huérfanas de empleados que con su trabajo compensaban la reducción del haber familiar.

«En cuanto a la situación legal, corresponde destacar que la empresa se ha limitado a hacer una advertencia a las empleadas de contaduría, en el acto de tomarlas, acerca de la necesidad de que la tarea sea desempeñada por mujeres solteras.

«Está siempre en sus manos despedir al personal administrativo por razones de mejor servicio, y si se las ha invitado a notificarse de dicha disposición reglamentaria ha sido con el único propósito de no causarles un perjuicio inesperado, al despedirlas por no reunir las condiciones necesarias para el empleo.

«La situación, como se ve, no reviste los caracteres antipáticos con que, a primera vista, y por deficiencia de información, aparecía.

«No es la empresa del Ferrocarril del Sud la única que, para ciertas secciones de su organización, se ve en la necesidad de poner semejantes condiciones. Muchas otras lo hacen, especialmente casas bancarias y comerciales, donde la calidad de las funciones que se les confían exige reserva. Por razones que no es del caso mencionar, la mujer casada pone, involuntariamente, en conocimiento de otras personas los hechos en que actúa. En un país de tan profunda fe religiosa como este, la sumisión espiritual de la mujer casada es notoria.

«Por último, la ley número 11.110, artículo 18, prevé especialmente el caso:

«A los empleados u obreros que fuesen declarados cesantes por no requerirse sus servicios o por razones de economía o que fuesen destituidos por causas distintas a las que se refiere el artículo 28 y a las que por contraer matrimonio se vieren obligados por los reglamentos de las empresas a dejar el trabajo, siempre que por esta ley no tuvieran derecho a un beneficio mayor, se les acordará:»

«Todo lo expuesto puede sintetizarse de la siguiente manera:

- «1º La Empresa del Ferrocarril del Sud en ningún momento ha creído faltar a la legislación vigente, máxime cuando una ley nacional prevé el caso;
- «2º Se trata de un hecho corriente;
- «3º Sería conveniente que el Estado reglamentase las condiciones del trabajo de las mujeres, previendo situaciones especiales como la que ha motivado la actitud del Ferrocarril del Sud, pues, de lo contrario, la empresa se verá en la necesidad de no utilizar personal femenino en los sistemas mecánicos de contabilidad».

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.
Manuel R. Alvarado.

—A sus antecedentes.

9

SITUACION DE LAS EMPLEADAS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO. — PROYECTO DE LEY DEL SENADOR PALACIOS.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

En la sesión del 14 de septiembre del año pasado, presenté una minuta que este alto cuer-

po aprobó por unanimidad y que decía así: «El Honorable Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo dictase urgentemente las medidas indispensables para evitar que las empresas concesionarias de servicios públicos exoneren a sus empleadas que contraen matrimonio.»

Al fundarla, puse en conocimiento del Senado la circular de un alto empleado de una empresa concesionaria, dirigida a uno de sus subordinados, la que contiene el párrafo siguiente: «... sírvase avisar a todo el personal femenino que al contraer enlace cesarán de ser empleadas por la Compañía. Toda empleada que entre al servicio de la empresa, en el futuro, deberá firmar una notificación, a este efecto, al ingresar».

El Poder Ejecutivo, en la contestación a la minuta, como acaban de oír los señores senadores, expresa que carece de facultades para dictar medidas compulsivas y que por tal razón ha dictado una medida de carácter declaratorio, creyendo que con ello se pondrá un límite razonable a la situación que denuncié ante el asombro de los señores senadores.

Esta declaración comunicaba a la Empresa del Ferrocarril del Sud, por intermedio de la Dirección de Ferrocarriles, dice: «... este departamento, Ministerio de Obras Públicas, no dicta en este asunto medida de compulsión, tendiente a evitar la cesantía de las empleadas que son declaradas cesantes por contraer matrimonio, debido a la falta de disposición legal expresa, que lo autorice al efecto, pero estima, que tomando en consideración las razones de orden público y social, etcétera, la empresa no insistirá en sus procedimientos.»

El Poder Ejecutivo se funda en los dictámenes del procurador general de la Nación y del procurador del Tesoro. Haré un breve examen de ellos.

El dictamen del procurador general de la Nación, no se relaciona directamente con la cuestión objeto de la minuta, sino con un expediente promovido por algunas empleadas del Ferrocarril del Sud a las que la empresa, haciendo efectiva una condición pactada de antemano, les exigió la renuncia por haber contraído matrimonio.

«Tal convenio, dice el procurador general de la Nación, debe reputarse nulo, pero como las recurrentes se han presentado ante la Cámara Federal apelando de la resolución de la Caja Ferroviaria, que les denegó la devolución de aportes, es prudente esperar el pronunciamiento judicial, pues si la sentencia ordena su devo-

lución, ello implicaría admitir que la cesantía no constituyó un acto ilegal o nulo.»

Termina así: «... Por supuesto, nada obsta a las disposiciones reglamentarias de carácter general que vuestra excelencia pudiera adoptar al respecto.»

De acuerdo, pues, con el dictamen del procurador general de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene facultades para dictar la reglamentación necesaria a objeto de impedir los convenios entre las empresas concesionarias y sus empleados, respecto a la prohibición de contraer matrimonio.

Por su parte, el procurador del Tesoro afirma: «Que el Estado es ajeno a la cuestión planteada; que las empresas de ferrocarriles en sus relaciones con las empleadas a su servicio pueden establecer cuantas condiciones crean convenientes a sus intereses, siempre que al hacerlo, no se resienta el servicio público cuya concesión usufructúa.»

Agrega el procurador del Tesoro que: «ante la imposibilidad de que el Estado tome ingerencia para prohibir esos pactos repudiados por la moral y las buenas costumbres, sólo cabría formular una declaración repudiando ese procedimiento y advirtiendo a las empleadas el derecho que les asiste a no acatar la condición estipulada.»

De acuerdo con la doctrina de este dictamen, resulta: primero, que las empresas concesionarias de servicios públicos, en sus relaciones con el personal pueden establecer las condiciones que crean convenientes a sus intereses con la única limitación de no «resentirse el servicio público»; segundo, que el Estado no tiene facultades legales para impedir o prohibir pactos repudiados por la moral y las buenas costumbres y estipulados por las empresas concesionarias con el personal a su servicio.

Como se ve, las conclusiones del procurador de la Nación y del procurador del Tesoro, son contradictorias.

El primero, cree que el Poder Ejecutivo tiene facultades para prohibir los pactos repudiados por la moral, que celebren las empresas concesionarias con sus empleadas. El segundo, las niega, y el Poder Ejecutivo acepta este último criterio.

Y bien. ¿Tiene o no atribuciones el Estado para impedir a las empresas concesionarias la celebración de convenios con su personal femenino, estipulando la prohibición de matrimonio, bajo sanción de cesantía en sus empleos?

Conviene advertir que en el derecho, en general, y particularmente en el derecho argentino,

está prohibida la condición de vivir célibe, expresándose, categóricamente, que tal condición deja sin efecto la obligación. Esta condición afecta fundamentalmente las buenas costumbres y es atentatorio del orden jurídico argentino.

Vélez Sársfield, en la nota del artículo 530, dice: «En el lenguaje del derecho se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas».

La cláusula de vivir célibe, aun temporalmente, es írrita en nuestro derecho, por ser contraria a la organización de la familia.

La prohibición prescripta en la ley, es de orden público, es protectora de las buenas costumbres, y si esas son sus finalidades, esa prohibición no es ni puede ser susceptible de renuncia.

Así, pues, la cuestión planteada debe enunciarse en la siguiente forma: ¿Tiene o no atribuciones el concedente —Estado—, para impedir al concesionario la celebración, con sus empleados, de convenios, contrarios a la moral, las buenas costumbres y el orden jurídico?

Veamos: Las relaciones jurídicas entre las partes, concesionario y empleado, están regidos principalmente por el contrato de locación de servicios y desde este punto de vista deben conformarse a la voluntad de los contratantes, pero, es claro, que con las limitaciones que las leyes prescriben.

Entre estas limitaciones está la condición prohibitiva de pactar cláusulas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, las cuales deben considerarse inexistentes.

Por consiguiente, las empleadas que hubieren subscrito tales convenios, obligándose con el concesionario a no contraer matrimonio, no pueden ser declaradas cesantes en sus empleos, pues tal estipulación es írrita; carece en absoluto de validez jurídica.

Y si el concesionario las declarase cesantes tienen derecho para ejercer las acciones judiciales correspondientes.

Pero la situación de las empleadas, frente al problema provocado por los pactos o convenios que el concesionario les ha impuesto, es independiente de la del Estado.

En efecto, la concesión de servicio público, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, es un acto jurídico de derecho público, por el cual el concedente —Estado— delega en el concesionario un poder jurídico sobre una determinada manifestación de la actividad administrativa, con el fin de que realice, por su propia cuenta y

riesgo, bajo el contralor del concedente, el servicio público concedido.

Así lo establece Mayer en su *Derecho Administrativo Alemán*, tomo III, página 153; Hauriou, en su *Tratado*; y entre nosotros, Bielsa y Benjamín Villegas Basavilbaso, eminentes profesores de las universidades de Buenos Aires y La Plata. Esa doctrina se ha sostenido, asimismo, en la jurisprudencia argentina de modo invariable, como puede verse en las causas «Gutiérrez versus C. H. A. D. E.» y «Sociedad Anónima Canal y Puerto del Oeste versus Fisco Nacional».

La delegación a que me he referido, no implica de modo alguno, para el concedente, renuncia de sus facultades ni abandono. Siempre, en todos los casos, es el único juez de esa delegación y por consiguiente mantiene sus poderes de intervención, contralor y dirección.

Por otra parte, nótese bien, el concesionario de un servicio público, al poner en función la delegación que ha recibido del Estado, obra como si fuera un órgano del Estado, y esto lo ha resuelto la jurisprudencia federal, como puede verse en *Jurisprudencia Argentina*, tomo LV, página 786, causa «Bacci v. C. H. A. D. E.».

De acuerdo, pues, con esta doctrina y los principios que regulan la institución jurídica que nos ocupa, es inadmisibles que un concesionario de servicio público, órgano del Estado, pueda, legítimamente, dictar reglamentaciones contrarias a la moral y buenas costumbres. Con tanta mayor razón, cuanto que el concedente —es decir, el Estado—, no puede imponer al personal de los servicios públicos que administra directamente, cláusulas contrarias al orden jurídico, como es la de no contraer matrimonio, bajo la sanción de despido.

Si bien es cierto que la ley orgánica de ferrocarriles no contiene disposición alguna que prevea el caso, no es menos cierto que, tratándose a las cláusulas atentatorias a la moral y buenas costumbres, no había por qué establecerla.

Considero, de acuerdo con el dictamen del procurador de la Nación, que nada obsta a las disposiciones reglamentarias de carácter general que pueda adoptar el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo tiene atribuciones para impedir, en el ejercicio de sus poderes de policía, la celebración de los pactos que atentan a la moral. Tratándose de actos contrarios al ordenamiento jurídico argentino, a la moral y a las buenas costumbres, es legítimo hacer uso de los poderes de policía para que cese un estado de cosas abiertamente en pugna con los intereses de la argentinidad.

No es suficiente que las empleadas declaradas cesantes por causa de haber contraído matrimonio, ejerciten las acciones que les acuerda la ley número 11.933, acciones de carácter individual, que pueden o no ejercer las interesadas, sino que es deber de la autoridad administrativa, prohibir, desde el punto de vista del contralor y policía del Estado, las perturbaciones al orden jurídico argentino.

El Poder Ejecutivo tiene atribuciones para imponer coactivamente el respeto a los preceptos del derecho sustantivo, a los principios de moral, a las exigencias de la salud pública, del orden social y a las buenas costumbres; más aún, entiendo que gravita sobre él, el deber de hacer efectivo el acatamiento a tales exigencias.

Sería inadmisibles que las leyes-contratos o las cláusulas de las concesiones tuvieran la virtud de limitar la acción del Poder Ejecutivo en defensa del orden público, de la moral, de la seguridad colectiva, de las buenas costumbres, de las leyes de la Nación; todo lo que constituye el poder de policía.

Así se sostiene en la doctrina y en la jurisprudencia norteamericana y argentina, cuyos fallos pongo a disposición de los señores senadores, y que aparecerán, próximamente, en el libro de que es autor un distinguido magistrado argentino, el doctor Ramón F. Vázquez.

Los derechos y privilegios que emergen de contratos celebrados con el Estado, se hallan sujetos a las regulaciones inherentes al poder de policía. Esto es como un axioma consagrado por la jurisprudencia.

La Suprema Corte de la Nación Argentina, ha dispuesto:

1º — Que la concesión no es un contrato de derecho común, entre partes iguales, sino el acto legislativo en virtud del cual el Estado hace delegación a una empresa para la debida realización de un servicio público. (Ver caso Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios v. Ferrocarril Central Argentino, t. CLII, pág. 413 - Fallos).

2º — Que no puede ser controvertido con éxito el poder del Estado para regular las condiciones y formas en que han de ejercerse grandes industrias que afectan, intensamente, los intereses públicos. Ya se trate de empresas que obtienen del Estado una concesión y privilegio especial para la realización de un servicio que en principio incumbe a aquél, o ya se trate de compañías poderosas que de hecho monopolizan una industria, a la que están vinculados el interés general, la riqueza colectiva y el porvenir del país, el control del Es-

tado fúndase en reglas esenciales de derecho público y en textos expuestos de la Ley Suprema. (Véase caso Frigorífico Swift y otros v. la Nación, en «Gaceta del Foro», t. CVII, págs. 151 a 155).

La amplitud de la intervención del Estado, mediante el ejercicio de sus poderes de policía, ha sido sostenida en numerosos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia que pueden leerse en los fallos registrados en los tomos CXII, página 367, y CXLVI, página 207.

Dé acuerdo con esos fallos, concordantes con la jurisprudencia norteamericana, cuando el Estado otorga una concesión para la explotación de un servicio público, no se desprende del poder de policía que le corresponde, y cualquier acto o convención que así lo dispusiera sería insanablemente nulo porque ese poder es inalienable e imprescriptible por su naturaleza y fundamento jurídico, ya que constituye un atributo esencial de la soberanía.

Un Estado no puede inhibirse a sí mismo, por concesión de contrato, de ejercer su poder de policía. Y bien; si es indiscutible el poder del Estado, en el caso delegado al Poder Ejecutivo de la Nación para ejercer el contralor de las actividades estatutarias de las sociedades anónimas y de las concesionarias que explotan servicios públicos; si es indudable la atribución legal del mismo para dictar las medidas de policía que convengan a la prestación de los servicios, objeto de la concesión, ¿cómo admitir que carece de facultades para imponer compulsivamente el acatamiento a las leyes de la Nación, máxime cuando ellas se vinculan a la moral, a las buenas costumbres, al orden social, al afianzamiento de la familia, como en el caso planteado?

Eso significaría admitir que el Poder Ejecutivo considera que las empresas concesionarias han logrado, en virtud de las concesiones, la delegación del poder de policía del Estado, es decir, la abdicación de una parte de la soberanía.

Pero como en el caso planteado ante este alto cuerpo, el Poder Ejecutivo comunica que carece de facultades «para dictar medidas compulsivas por falta de disposición legal expresa que lo autorice, y no obstante entender que las cláusulas inmorales pactadas por la empresa concesionaria con el personal femenino de la misma, pueden legalmente ser prohibidas por la vía reglamentaria, en el ejercicio de los poderes de policía del concedente, considero necesario dictar la ley que ponga término definitivo a esas demasías, en todos los casos.»

Ningún reparo puede ser óbice a esa ley, por cuanto se trata de crear situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas para todas las empresas concesionarias de servicios públicos en materia relacionada directamente con la moral y las buenas costumbres.

Al contrario; todo exige esa ley, después de la contestación del Poder Ejecutivo a la minuta sancionada únicamente por el Senado.

Hubiera bastado con un decreto, señores senadores.

Así lo reconocen los maestros de derecho administrativo y el procurador de la Nación.

Así lo reconoció la opinión pública cuando presentó la minuta aprobada por unanimidad en este Senado.

«La Nación», en un editorial del 16 de septiembre, dijo: «La lectura de la minuta sugiere alguna perplejidad. A nadie se le puede ocurrir que un trabajador haya de ser exonerado por el hecho de haber contraído matrimonio, y parecería entonces inoficioso, adoptar medidas para evitarlo. Pero, desgraciadamente, la minuta aprobada por el Senado no responde a motivos teóricos. Se funda en hechos ya producidos y cuyo conocimiento ha de causar el más desagradable efecto en la opinión pública». Y agrega: «La medida adoptada por la compañía cuyo nombre se citó en el Senado, respondería al propósito de eludir el cumplimiento de una ley argentina. Si ella fuera inconstitucional o vulnerara derechos legítimos, habría correspondido acudir ante los tribunales para impugnarla en su fondo, o en su aplicación. Pero como en este terreno ningún recurso sería viable dada la perfecta licitud y la indudable moderación de sus disposiciones, no se ha vacilado en recurrir a un procedimiento que asombra por su arbitrariedad. Y se ha encontrado, tan natural, la solución extraordinaria, que ni siquiera se ha reparado en el extremo a que llevarían sus consecuencias. No se trata tan sólo, en efecto, de resistirse al acatamiento de una ley nacional, sino también de conspirar contra supremas conveniencias sociales, como son las relativas al desarrollo de la nupcialidad. Sería realmente inaudito que las empresas de servicios públicos pudieran entregarse, por tal modo, a una campaña que afectaría a la Nación, en su progreso y en su moral. La minuta del Senado ha sido, por lo tanto, de una oportunidad manifiesta. El Poder Ejecutivo debe tomarla en cuenta sin demora y adoptar las medidas que las propias informaciones le aconsejen. Estamos seguros de que una vez recogidas ellas, quedará com-

probado que las autoridades superiores de las empresas son extrañas a la medida, obra posible de funcionarios que no midieron exactamente su gravedad.»

Y «La Prensa» del mismo día, dice, refiriéndose a la minuta: «Podrá argüirse que si una empresa concesionaria notifica a su personal femenino la prohibición de contraer matrimonio y señala el despido como pena para quien no la cumpla, ese personal que suscribe aquella notificación y la acepta, celebra un contrato, ya que para la ley civil lo hay cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.

«Pero no debe olvidarse que también la misma ley dispone que los contratos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres, y, precisamente, se daña al orden público y a las buenas costumbres, cuando se pretende dar validez a una cláusula contractual como la impugnada en el Senado». Y agrega: «Como las empresas que explotan servicios públicos tienen un carácter semioficial, es razonable que los poderes públicos intervengan en ciertos actos que revisten interés general.

«En este caso lo que interesa fundamentalmente es la fase moral. No podrá hallarse argumento capaz de atenuar la desfavorable impresión del recurso cuya aplicación afecta aspectos esenciales de la organización social, y es en este sentido que la minuta votada por el Senado debe merecer preferente atención del Poder Ejecutivo».

Y, por último, «La Razón», en un violento editorial, después de repudiar la actitud de las empresas que despiden a los empleados que se casan, dice: «El gobierno debe recoger el eco de las palabras pronunciadas ayer en el Senado y está en la obligación de dictar, cuanto antes, las medidas que impidan a una empresa extranjera conspirar contra el desenvolvimiento natural del pueblo que las hospeda. Sin duda, la opinión pública, que tantas veces ha escuchado el elogio que se hace a los ferrocarriles; que ha visto a estos recurrir a las viejas frases del fomento y del progreso, que siempre emplean para defender sus intereses; que está acostumbrada a leer en sus notas la acción patriótica que desarrollan para impulsar la civilización, primitivamente dominada por el desierto, repudiará esa duplicidad que pone en descubierto la sola razón material que

las anima, al enterarse que, *exonera a las madres e impide el casamiento*, con un texto inglés que daña los intereses argentinos».

Pero la gravedad del problema no se limita a las empresas concesionarias de servicios públicos.

Por eso, la ley que propongo con motivo de este asunto, incluido a las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, al enviar el mensaje de que se ha dado lectura, debe comprender a todas las empresas, sean públicas o privadas.

Entrego el proyecto que pido se trate sobre tablas.

Por él queda prohibido a las empresas concesionarias de servicios públicos, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, y a los patrones, dictar reglamentaciones internas, celebrar pactos o convenios que establezcan el despido para el personal de mujeres, por causa de matrimonio, sin perjuicio de las acciones judiciales que a las interesadas corresponda.

Todo infractor se hará pasible de una multa de \$ 1.000 a 10.000 m/n. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa; y, tratándose de entidades con personería jurídica, ésta será cancelada.

Señor presidente: Entiendo así, impedir que predomine el menguado interés particular, sobre el interés colectivo de nuestro pueblo. Entiendo así, evitar, que por razones de lucro, se desprecien nuestros valores morales y nuestras instituciones.

Hemos de ser celosos, señores senadores, en la conservación de nuestro patrimonio espiritual.

Todo está pasando a manos del capital extranjero.

Un periodista de talento, adversario en ideas, acaba de decir, con razón, en el diario que dirige, que los grandes *trusts* extranjeros son los dueños, y nosotros, los inquilinos, lo que sin duda es grave, porque para nosotros, la República en una entidad moral, una comunidad de sentimientos y de ideas, y para el capital extranjero, frecuentemente, es un negocio.

Por eso no le interesa el afianzamiento de la familia argentina que yo vengo a defender ante el Senado.

Sostengo, señor presidente, que este proyecto puede ser tratado sobre tablas, como lo solicito. Independientemente de mi opinión, que es compartida por muchos señores senadores, de que la convocatoria a sesiones extraordinarias no impide la amplitud del ejercicio de nuestras facultades, como cuerpo legislativo,

este asunto puede ser considerado, porque el mensaje del Poder Ejecutivo, en contestación a la minuta, significa su incorporación a las sesiones extraordinarias. Es ésta también la opinión de mi ilustrado colega, el señor senador Landaburu, quien me ha de acompañar con su voto en el pedido que formulo de inmediata consideración.

Sr. Presidente. — ¿Formula moción en ese sentido el señor senador?

Sr. Palacios. — Sí, señor presidente.

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Queda prohibido a las empresas concesionarias de servicios públicos, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza y a los patrones, dictar reglamentaciones internas, celebrar pactos o convenios que establezcan el despido para el personal de mujeres, por causa de matrimonio, sin perjuicio de las acciones judiciales que a las interesadas corresponda.

Art. 2º — Las violaciones a la presente ley serán sancionadas con multa de mil a diez mil pesos moneda nacional, por cada infracción. En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la multa; y tratándose de entidades con personería jurídica, ésta será cancelada.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Alfredo L. Palacios.

10

MOCION

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción formulada por el señor senador por la Capital.

Sr. Arancibia Rodríguez. — ¿En qué consiste?

Sr. Presidente. — En tratar sobre tablas el proyecto de ley del señor senador por la Capital, que acaba de leerse.

Sr. Palacios. — ¿Me permite el señor presidente?

Se trata de un proyecto de ley que contiene precisamente la minuta aprobada por unanimidad por el Senado.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Soy un decidido partidario del proyecto de ley del señor senador; por eso mismo sentiría que fuera a tener alguna falla respecto del trámite que pudiera invalidarlo más adelante. Desearía saber si este

asunto está incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Sr. Presidente. — En el mensaje del Poder Ejecutivo, no está incluido sino el proyecto de ley de presupuesto.

Sr. Palacios. — He dicho ya que independientemente de la opinión que se pueda tener respecto de la amplitud de facultades del Senado, el proyecto está incluido en las sesiones extraordinarias por el hecho de que el Poder Ejecutivo ha enviado un mensaje contestando la minuta aprobada por el Honorable Senado. Hay razón, en este caso, para discutir y tomar una medida legislativa, máxime cuando el Poder Ejecutivo declara que carece de atribuciones para solucionar el problema que he planteado, lo que le obliga simplemente a hacer una declaración.

Sr. Arancibia Rodríguez. — No quiero de ninguna manera entorpecer el trámite del asunto; he hecho la observación solamente para evitar su nulidad por mal procedimiento. Desearía, pues, que el Senado se pronunciara declarando que está comprendido en la convocatoria.

Sr. Palacios. — Sería una afirmación nueva del Senado. En caso necesario otra votación resolvería el asunto.

Sr. Caballero. — No he entendido la explicación del señor senador por San Luis.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Que se considere incluido, en virtud de las circunstancias invocadas por el señor senador por la Capital, el asunto de que se trata, dentro del período extraordinario en que estamos actuando, a fin de que el Senado trate sobre tablas el proyecto.

Sr. Sánchez Sorondo. — Pido la palabra.

Partidario del proyecto que ha presentado el señor senador por la Capital, si se presentara la moción en los términos en que acaba de formularla el señor senador por San Luis, me vería obligado a votar en contra.

Entiendo que el Senado no debe poner en duda que cuando el Congreso está reunido, lo está en la plenitud de sus facultades y que la restricción que se observa en la jurisprudencia parlamentaria de este principio, es una invasión del Poder Ejecutivo a los fueros del Congreso.

Sr. Palacios. — La moción es simplemente de tratar este proyecto sobre tablas, de manera que lo que votará el señor senador, es eso.

Sr. Sánchez Sorondo. — El señor senador por San Luis había propuesto otra cosa.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Refirmando las facultades del Congreso, que el señor senador

bién por las estadísticas que se han dado a conocer en el transcurso del año pasado sobre el estado precario de salud de la infancia que concurría a las aulas, particularmente la perteneciente a algunas escuelas del interior.»

Todo esto, señor presidente, explica de una manera muy clara el pedido formulado al presidente de la República por el señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, nuestro ex colega el doctor Pío Montenegro solicitando que se incluya en las sesiones extraordinarias el plan sanitario que aprobó el Senado.

Todo esto explica, también, la innumerable cantidad de solicitudes de instituciones educativas y de grupos de agricultores de las provincias de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, algunas de las cuales tengo sobre mi pupitre y pido sean incorporadas al Diario de Sesiones, como expresión de un anhelo público. (1)

Me ha de permitir la Honorable Cámara que antes de terminar y para demostrar de un modo que no permita la más leve hesitación, la necesidad impostergable de sancionar este proyecto, que lea las palabras pronunciadas por el general Adolfo Arana, presidente del Consejo Nacional de Educación Física, relativas a este proyecto.

«En lo que respecta a las provincias —dice el ilustrado militar— no ignoramos que constituye una cuestión previa la escasez de alimentos y las precarias condiciones de vida a que la infancia se ve sometida, por factores que no es del caso analizar ahora; pero, felizmente, el Senado de la Nación acaba de prestar sanción a un proyecto de amplia asistencia social a los escolares necesitados del interior, del que es autor el senador doctor Palacios. Por su inspiración genuinamente cristiana, es de esperar que hallará el mejor auspicio en la Cámara joven, y quedará convertido en ley, acaso de las más sabias, patrióticas y constructivas a mi juicio, que haya dictado en los últimos tiempos el Parlamento argentino.

«Resuelto por ese camino el problema de su nutrición, nada más oportuno que la educación física nacional y graduada para esos niños, que por medio de los ejercicios corregirían las precoces deformaciones de sus cuerpecitos, acrecentarían su vitalidad general e iluminarían sus almas mustias, con alegrías del juego y el aliento de optimismo.»

Parece absurdo, señores senadores, que haya

un Instituto de Educación Física Nacional, cuando los niños se mueren de hambre en las provincias del Norte. Y por eso son juiciosas y realmente dignas de que se les preste atención, las palabras pronunciadas por el ilustrado general Arana.

Lo expuesto es suficiente para que el Honorable Senado vote sobre tablas la minuta que acabo de presentar.

Hago moción en ese sentido.

Sr. Presidente (Porto). — ¿El señor senador solicita que se trate sobre tablas la minuta, de que es autor?

Sr. Palacios. — Sí, señor presidente, las minutas se tratan sobre tablas.

Sr. Presidente (Porto). — Está en consideración el proyecto de minuta formulado por el señor senador por la Capital.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—No habiendo número en el recinto para votar y pasados unos minutos, dice el

Sr. Presidente (Porto). — Estando reunida la Comisión de Acuerdos para producir despacho, sobre los pliegos que ha resuelto considerar el Honorable Senado, invito a la Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo la hora 19 y 10.

—Vueltos a sus asientos los señores senadores, siendo las 20 y 10, dice el

Sr. Presidente (Porto). — Continúa la sesión.

—Se lee nuevamente la minuta presentada por el señor senador por la Capital, doctor Palacios.

Sr. Presidente (Porto). — Se va a votar, en general, el proyecto minuta que acaba de leerse.

—Se vota y aprueba en general, así como en particular.

Sr. Presidente (Porto). — Queda aprobado.

18

SITUACION DE LAS EMPLEADAS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

La Cámara ha resuelto, hace un momento,

(1) Véase página 142.

Enero 27 y 28 de 1938

CAMARA DE SENADORES

16ª Reunión, Sesión extraordinaria

considerar sobre tablas el proyecto que presenté y que fué leído por la Secretaría, de manera que entiendo que corresponde tratarlo ahora.

Sr. Presidente (Porto). — Sí, señor senador. Se va a leer nuevamente.

—Así se hace.

Sr. Presidente (Porto). — En consideración en general.

Se va a votar.

—Se vota y aprueba en general, así como en particular.

Sr. Presidente (Porto). — Queda aprobado.

Proyecto de Ley General de Presupuesto de la Administración

Buenos Aires, 22 de enero de 1938.

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de presidir ha sancionado en la sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1938 la ley número 12.345 de presupuesto general de la Nación para el año 1937, y las leyes números 12.349, 12.350, 12.356 y 12.358, con las modificaciones de la presente ley.

Artículo 2º — Substitúyense los anexos L (Trabajos Públicos) y M (Asistencia Social) del presupuesto general de la ley número 12.345, por los que figuran en planillas anexas.

Artículo 3º — Suprímense los artículos 9º, 10, 16, 21 al 23, 26, 28, 29, 31 al 41, 45 al 47, 49 al 56, 58, 65, 68 al 77, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 92, 97, 101, 102, 120, 136, 144, 146, 153, 167, 168, 181, 184, 185, 187, 188, 190, 191 y 193, de la ley número 12.345, por haber sido incorporados a la ley complementaria permanente de presupuesto o a las leyes de impuestos correspondientes.

Artículo 4º — Deróganse los artículos 3º, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 30, 48, 64, 67, 81, 85 (1ª parte), 86 al 91, 93 al 96, 98, 100, 104 al 107, 109 al 119, 121 al 135, 137, 139 al 143, 145, 147 al 150, 152, 154 al 166, 170, 171, 192, 194 y 195 de la ley número 12.345.

Artículo 5º — Incorpórase a la ley número 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), los artículos 7º, 19, 66, 85 (2ª parte), 103, 108 y 138 de la ley número 12.345 de presupuesto general de la Nación para 1937, modificados en la siguiente forma:

«Artículo 7º — Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, con mención de la ley o leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos denominados Crédito Argentino Interno, de un interés no mayor de 5 % y con una amortización anual suficiente para retirar la emisión dentro de un plazo no mayor de 55 años, mediante sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o sobre la par y licitación o compra cuando la cotización sea abajo de la par.»

CONSTITUCION DEL SENADO EN COMISION

Sr. Presidente (Porto). — El Senado constituido en comisión, debe proceder a nombrar el presidente y secretarios que van a actuar en la conferencia.

Sr. Martínez. — Hago indicación para que se confirme la mesa directiva.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Porto). — Habiendo asentimiento, así se hará.

Queda abierta la conferencia.

—Se lee: